

Las narrativas que construyen un sentido comun extractivista

Eduardo Gudynas

Introducción

Si bien los extractivismos tienen una larga historia que puede rastrearse hasta los tiempos coloniales, en las últimas décadas ha quedado en evidencia su capacidad para mantenerse bajo muy distintos regímenes políticos. Entendiendo a los extractivismos como modos de apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales o bajo procesos de alta intensidad, para exportarlos a los mercados globales, siguen siendo vistos como necesarias mediaciones para el desarrollo. Eso ha hecho que América Latina no pudiera dejar de ser proveedora de materias primas desempeñando papeles subordinados en la globalización.

Esos extractivismos permanecen pero cambian, en tanto se organizan de diferentes modos. De ese modo, se han conformado extractivismos conservadores como en Colombia o Perú, junto a otros con distintos tonos progresistas como en Bolivia, Ecuador o Venezuela, a sucesiones dramáticas donde se ha transitado desde gobiernos conservadores a progresistas para luego recaer en el conservadurismo (como se observa en Argentina y Brasil). En unos casos, los extractivismos se desplegaban en el mercado con un papel subsidiario del Estado, y en otros se resolvían con un mayor concurso estatal.

Dentro de esa permanencia hay casos extremos, como en Venezuela y Brasil. El gobierno de N. Maduro se aferra a un discurso progresista con retórica anti-imperialista, pero sigue dependiendo del sector petrolero aunque sumándole diversos emprendimientos mineros en una amplia zona del

sur del país. Con un discurso casi opuesto, Jai Bolsonaro en Brasil anuncia una profundización de los extractivismos, ampliando la frontera agrícola y ganadera, liberando el acceso a zonas indígenas o bajo protección ambiental, amparándose en discursos más violentistas y ultraconservadores.

Existen diferencias importantes entre las estrategias conservadoras y las progresistas, y no se pretende aquí negarlas (GUDYNAS; GUEVAEA; ROQUE, 2008). Pero lo llamativo es que a pesar de esas diferencias, los extractivismos tienen múltiples defensores y en muy diversos ámbitos de la sociedad. Este artículo pone el énfasis en esa particularidad, y para ello aplica la idea de narrativas. Consecuentemente se analiza las peculiaridades de las narrativas que sostienen y legitiman la construcción de un “sentido común” extractivistas.

1 Argumentos y narrativas

La invocación a la idea de narrativas tiene muchos antecedentes en el análisis de las políticas públicas, incluyendo las “narrativas del desarrollo” como en Roe (1991), o la idea de “historias causales”, como en Stone (2012); otros abordajes se ilustran en Roe (1994), Fischer (2003), Jones y McBeth (2010), Gsottbauer y Van Den Berg (2011), y Fischer y Hottweis (2013). Algunos abordajes se superponen con los análisis de los discursos (ROE, 1994; ANTONELLI, 2014).

La estructura en las narraciones descansa en articular “argumentos”, los que son componentes que incluyen una premisa, para avanzar hacia una conclusión que se presenta como un resultado lógico. Es importante tener presente que narrativas y argumentos no son sinónimos (FISCHER, 2003; WODAK, 2016).

Tomando en cuenta estos insumos, como punto de partida es posible indicar que las “narrativas” son entendidas como historias con una trama que describen situaciones y significados, y que utilizan diversos argumentos. Estas sirven para construir y sostener políticas públicas, como ocurre con los extractivismos, pero que también operan en otros campos, como la salud,

educación, etc. En la cuestión que aquí se abordan, los extractivismos, esos entramados los presentan como beneficiosos y necesarios, mientras que a la vez anulan las denuncias y confirmaciones de sus impactos sociales y ambientales; los legitiman y a la vez impiden la búsqueda de alternativas.

En este texto se ofrece como ejemplo de referencia de una narrativa extractivista las declaraciones de Brigitte Baptiste, directora del Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Bogotá ¹. Ella apoya la explotación petrolera, afirmando que Colombia debe extraer “hasta la última gota” y lo fundamenta con una larga lista de argumentos. Es un caso revelador por varios motivos. Su postura es extrema, tal como dice al proponer extraer hasta la “última gota” de petróleo; sus ideas resumen las posiciones que en todos los países sudamericanos son esgrimidas por políticos, empresarios y académicos, aunque no siempre las afirmen tan directamente o estén todas agrupadas en una única declaración. Además, es un caso donde la defensa extractivista proviene de alguien que es presentado como “experto” o “científico” en temas ambientales. Esta situación se analiza en detalle en otro texto (GUDYNAS, 2019), y aquí se resumen y reproducen sus resultados más importantes.

2 El caso de la defensa extractivista

Las declaraciones de B. Baptiste ofrecen variados argumentos que interesan a distintos campos involucrados en los extractivismos. Comenzando por la dimensión ambiental, ella entiende que la explotación petrolera tiene impactos ambientales “casi cero”, considera que las compañías han “asimilado muy bien” en los últimos 25-30 años todo el desarrollo del licenciamiento y evaluaciones ambientales, sobre todo en “disminuir costos sociales y

¹ “Me opongo a las consultas populares hechas por campañas mediáticas”: Brigitte Baptiste, entrevista de A. Vargas Ferro, La Silla Vacía, 10 enero 2018, <http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/me-opongo-las-consultas-populares-hechas-por-campanas-mediaticas>

Ver además, Baptiste, B. Ciencia prefabricada. Semana, Bogotá, 22 febrero 2018, <http://www.semana.com/opinion/articulo/la-importancia-de-hacer-buena-ciencia-columna-de-opinion-de-brigitte-baptiste/557890>

ecosistémicos” de los impactos, y que su “innovación” es “impresionante”. Desde un gran optimismo tecnológico postula que podría explotarse petróleo en forma amigable con preservar la biodiversidad y simultáneamente minimiza los aportes de esos hidrocarburos colombianos en alimentar el cambio climático. Agrega que los efectos sobre el territorio nacional son minúsculos por la pequeña superficie que ocupan los enclaves de los pozos petroleros. Sostiene que no hay otras alternativas para el desarrollo del país y cuestionan la utilidad de las consultas a comunidades locales sobre los extractivismos. Varios de estos argumentos ya han sido utilizados en países como Bolivia, Brasil o Ecuador para defender la extracción convencional de hidrocarburos, y en Argentina para el fracking.

Sin embargo, esos dichos carecen de apoyo científico, y por el contrario, existe una enorme cantidad de estudios que evidencian la existencia de impactos ambientales, y que éstos son graves. En este artículo no es posible revisarlos con detenimiento, pero existen impactos en la exploración y la prospección, en las etapas de operación y en las de abandono. Estos se deben a efectos como la deforestación para lograr el acceso, la disposición de aguas, lodos y residuos que a su vez contaminan aguas subterráneas y superficiales, emisiones de gases, etc. (GUDYNAS, 2019; CAMPANINI *et al.*, 2014; LESSAMM; FAJARDO; MÚÑOZ, 2016; WCS, 2006).

Por lo tanto, sea por la información científica como por la vivencia en las comunidades, no es correcto argumentar que la explotación petrolera tenga un impacto “casi cero” o que sea “amigable” con la biodiversidad. Por el contrario, tienen sustantivos efectos negativos, tanto en la estructura como en la dinámica de los sistemas ecológicos, muchos de ellos conocidos y posiblemente otros todavía no evaluados adecuadamente. Paralelamente, hay otras consecuencias negativas en la dimensión social, desde el desplazamiento de comunidades indígenas a la proliferación de violencia sobre los grupos locales, que tampoco pueden ser ignorados.

El argumento de la superficie afectada es utilizado para indicar que los enclaves petroleros ocupan pequeñas áreas y por ello los problemas ambientales estaría en la ganadería y agricultura, las que ocupan superficies

enormes. Por momentos se llega a posturas bizarras, donde puede decirse que cultivar alimentos es más dañino que bombear petróleo.

Ese razonamiento adolece de varias simplificaciones. Por un lado, enclaves pequeños como los mineros o petroleros tienen efectos territoriales amplificadas ya que se organizan en redes donde hay vías de conexión (como oleoductos o gasoductos), y a su vez cuentan con cuencas de soporte (por ejemplo, las represas que brindan energía eléctrica). Finalmente, esos enclaves están dentro de concesiones mineras o petroleras, las que a su vez tienen afectaciones territoriales de gran escala. Todo esto genera impactos ambientales en amplias zonas geográficas.

Por otro lado, también olvida que estamos ante dos tipos de explotaciones muy distintas. Tanto los hidrocarburos como los minerales son recursos naturales no renovables, o sean que se agotan, implicando una pérdida de patrimonio ecológico que es irreversible. En cambio, la agricultura descansa en recursos naturales renovables, y por ello hay más opciones para prácticas sostenibles.

Esta diferencia es posiblemente extrema en la minería a cielo abierto, ya que muchos emprendimientos representan en realidad una “amputación ecológica”. En ella ocurre una remoción física del ambiente como resultado de minar millones de toneladas de roca por año, que hacen desaparecer cerros y dejan enormes cráteres. Ejemplos de estas amputaciones son los enclaves de Cerrejón en Colombia, Yanacocha en Perú o Carajás en Brasil. Bajo estas condiciones, las medidas de mitigación o remediación ambiental son en realidad eufemismos para lidiar con algunos efectos secundarios (por ejemplo, polvo), sin que pueda recuperarse el ambiente original (GUDYNAS, 2015a).

La narrativa que defiende los extractivismos reduce, minimiza u oculta todas estas particularidades, como si fueron lo mismo los recursos renovables y los no renovables, y hace desaparecer esas amputaciones. Las analogías con la agricultura son infundadas, ya que pueden existir prácticas agroecológicas pero no existe nada parecido a una explotación minera o petrolera “ecológica” u “orgánica”.

La defensa de los extractivismos petroleros afirmando que los países sudamericanos emiten volúmenes insignificantes de gases invernadero

también es repetido. Se lo usa para insistir en que se tiene el “derecho” de seguir extrayendo crudo, que eso es una necesidad económica, y que el cambio climático es un problema que deben resolver los países industrializados (esta es la postura, por ejemplo de países como Bolivia y Venezuela). Sin embargo, todos los países sudamericanos realizan emisiones, que en casos como Brasil lo colocan entre los grandes contaminadores globales, y que cuando son ponderadas por persona, se acercan mucho más a los indicadores de los países industrializados². Pero además, los hidrocarburos de los países exportadores, como Ecuador, Colombia o Venezuela, son quemados en algún otro sitio del planeta, y por lo tanto sí contribuyen al aumento de la temperatura global. Es por estas razones que la comunidad científica agrupada en el Panel Internacional en Cambio Climático reclama severas restricciones a la civilización petrolera, que apuntan a detener nuevas explotaciones.

Finalmente, se deben considerar los argumentos de una nueva actitud empresarial, sea porque usar tecnologías que reducirían los impactos o por su responsabilidad social y ambiental. Baptiste, por ejemplo, enumera cualidades que presenta como positivas y con adjetivos contundentes: el sector petrolero sería dinámico, muestra una “innovación impresionante”, ha reinvertido buena parte de su “riqueza” en innovación, genera todo el tiempo competitividad y eficiencia³. Los argumentos de una buena gestión ambiental empresarial se mezclan con otros que aluden a que las comunidades locales no estarían percibiendo esos cambios empresariales, y desde allí se postula que sus desconfianzas serían infundadas. Se sugiere que ese desconocimiento alimenta las resistencias a los extractivismos, pero que “si supieran”, los aceptarían.

Un examen de esos discursos no puede olvidar lo más obvio: la “riqueza” obtenida por las empresas petroleras (o sea capital) va sobre todo a sus accionistas y los servicios de su deuda, y no a la innovación científico-tecnológica. En efecto, ha existido una caída estimada en el 15% de las

² Los indicadores están disponibles en CAIT del World Resources Institute en <https://cait.wri.org/>

³ Me opongo a las consultas populares ...; entrevista citada en la nota 1.

reinversiones en investigación y desarrollo de las compañías en 2015, y un adicional 5 % en 2016, según la Agencia Internacional de Energía⁴.

La gestión ambiental de las empresas basadas en la llamada “responsabilidad social” muestran que no tienen efectos sustantivos o son muy modestos (FRYNAS, 2005). En efecto, el sector petrolero tiene un historial negativo en el cumplimiento de exigencias y controles ambientales, utilizan tecnologías viejas o inadecuadas, padecen derrames y otros accidentes, ocultan evidencias, etc. (O’ROURKE; CONNOLLY, 2003). Varios de esos casos han ocurrido en América del Sur (KIMERLING, 2001; RUIZ MOLLEDA; VPASQUEZ; TRUJILLO, 2017; HONTY, 2016⁵)⁶. El propio sector petrolero reconoce que su ingeniería no busca proteger el ambiente sino maximizar la extracción (WOJTANOWICZ, 2016). El mismo problema se repite en los extractivismos mineros (como sucedió en Brasil con las roturas de las represas de relaves de Mariana en 2016 y de Brumadinho en 2019). Ni siquiera los gobiernos progresistas han logrado de otra manera una supuesta responsabilidad empresarial (CISNEROS; CHRISTEL, 2014).

3 Efectos derrames en las políticas públicas

En general el debate público está centrado en los impactos locales de los extractivismos, como ocurre con el deterioro ambiental, y de esa manera pasan desapercibidos los llamados “efectos derrame” sobre las políticas públicas (GUDYNAS, 2015b). Ejemplos de estos son las rebajas en las condiciones ambientales para promover ciertos proyectos extractivos (como ocurrió con las licencias ambientales *express* en Perú y Colombia), donde su condición

⁴ IEA: Oil, Gas R&D Investment Stumbles, Despite Technology Benefits, V. Addison, E&P (Exploration & Production) Magazine, 11 Julio 2017, <https://www.epmag.com/iea-oil-gas-rd-investment-stumbles-despite-technology-benefits-1642791#p=full>

⁵ Para la Amazonia de Ecuador y Perú y véase por más precisiones diversos reportes de prensa para Argentina.

⁶ En Argentina se estima que en las explotaciones de la cuenca de Neuquén se producen dos derrames por día; un total de 3368 “incidentes ambientales” en cuatro años; Los derrames de Vaca Muerta, Página 12, B. Aires, 19 noviembre 2018, <https://www.pagina12.com.ar/156412-los-derrames-de-vaca-muerta>

de “derrame” radica en que con esas medidas se deteriora toda la normativa ambiental y en todo el territorio. Otros derrames sustantivos ocurren con los derechos humanos, ya que para apoyar un proyecto se vuelve común esconder información o tolerar la violencia local. En esas situaciones se derrama un recorte sobre la salvaguardia de los derechos ciudadanos. De la misma manera hay derrames económicos, políticos, culturales, etc. Como pueden verse los efectos derrames no están acotados espacialmente, y muchos de ellos son previos a esos emprendimientos, ya que son condiciones para hacer posible las inversiones futuras.

Es muy importante tener presente esta distinción. En sectores como hidrocarburos y megaminería los efectos derrame pueden ser mucho más graves que los impactos locales. Esto se debe a que no son fácilmente identificados como tales y son más difíciles de revertir. Las narrativas extractivistas también operan a este nivel, presentando esos cambios como positivos y necesarios en sí mismos, por lo general como medios para asegurar el crecimiento económico.

Ese tipo de vinculaciones son las que aprovechan muchas de las justificaciones económicas de los extractivismos. El argumento clásico es que la explotación petrolera siempre es un buen negocio porque, por ejemplo, generaría muchos ingresos de dinero por exportaciones. Pero esa afirmación sólo es posible si se distorsionan severamente las contabilidades ambientales, dejándose de lado los costos económicos que generan los impactos negativos de los extractivismos. En efecto, el precio del crudo no incorpora costos sociales ni ambientales, ni las diseconomías que producen a nivel local, y que se expresan en todo tipo de externalidades económicas hacia la sociedad. Las narrativas políticas y económicas sistemáticamente desvinculan esos costos de los extractivismos, los ignoran, y presentan esa contabilidad distorsionada como objetiva y rigurosa, cuando no lo es. A su vez, esto es parte de una familia de narraciones convencionales desarrollistas muy comunes en América Latina, ya que se basan en explotar los recursos naturales para el crecimiento económico.

En todo esto aparece una pretensión de superioridad del conocimiento experto de los defensores de los extractivismos, cuando en realidad la academia carece de la información necesaria para decir que es “ventajoso”

extraer todos los hidrocarburos. Hay pocos estudios que incorporan los costos sociales y ecológicos, y sus resultados muestran una situación muy distinta⁷ (VALLEJO *et al.*, 2011).

Las mismas confusiones ocurren cuando se esgrimen como justificaciones que los extractivismos permiten ofrecer compensaciones económicas a quienes pudieran ser afectados. Se brindan en algunos sitios ayudas económicas directas o indirectas en asistencia médica, vivienda, alimentos, empleo, etc., como si esto compensara los daños ambientales, sanitarios o sociales. Es esta otra distorsión ya que los pagos en dineros no reemplazan ecosistemas destruidos o la salud perdida. Pero en cambio termina generando instrumentos de gestión pública del tipo “te contamina, pero te pago”, con toda la perversidad que implican.

4 Expertos y ciencia

En varios de los asuntos tratados, las narrativas que defienden a los extractivismos invocan a la ciencia y a los científicos. Eso implica asumir que hay “una ciencia” objetiva, neutra y homogénea sobre sus saberes, y que aquellos que poseen un título universitario o trabajan en instituciones académicas manejan conocimientos más ciertos y correctos que otras personas.

Es necesaria mucha precaución ante esas posiciones. Comencemos por precisar que la minimización de los impactos ambientales o aseverar que la tecnología permite resolverlos, remite al terreno de las viejas ciencias cartesianas, ancladas en el positivismo, y por ello deterministas. Estas abordan al ambiente como un sistema que se puede conocer en detalle, y a su interior discurren interacciones simples que pueden ser predichas con cierta eficacia. El ecólogo sería casi un ingeniero que manipula sistemas ecológicos.

En cambio, avances recientes en ciencias ambientales apuntan en un sentido casi inverso. El ambiente no se puede reducir a una simple maquinaria,

⁷ Como muestra la evaluación multicriterio realizada en Ecuador, indicando que en algunos escenarios era más ventajosa para el país dejar el crudo en el subsuelo amazónico.

no todos los componentes son conocidos, las relaciones entre ellos se entienden parcialmente, y éstas tampoco son simples vínculos causa–efecto. Hay todo tipo de interacciones y buena parte no son lineales ni acotadas en el tiempo o el espacio. En las actuales perspectivas se reconoce la incertidumbre, y el riesgo es un elemento clave (FUNTOWICZ; RAVTEZ, 2000). Su resultado es un ecólogo limitado por la incertidumbre y el riesgo, que nunca podría afirmar que la explotación petrolera u otro extractivismo tiene un impacto casi “cero”, ya que eso es imposible de confirmar desde un punto de vista ecológico. En cambio, ese académico dudará, enumerará las incertezas y reclamará precaución (GUDYNAS, 2018).

Este brevísimos repaso permite dejar en evidencia que no puede proclamarse que existe una única posición científica en esta materia. Las narrativas que defienden los extractivismos descansan en la vieja mirada cartesiana de la ciencia que alimenta el optimismo de la predicción y mitigación de impactos ambientales, y por ello tienen muchas dificultades en aceptar las incertidumbres e ignorancias. Su talante también subordina otros saberes.

5 Política y democracia

Los aspectos considerados hasta aquí dejan en evidencia que las narrativas extractivistas también implican reformulaciones y rediseños en los modos de discutir las políticas públicas. Esto no puede sorprender, porque entre los derrames de los extractivismos están aquellos que afectan la política en sentido amplio, como pueden ser las limitaciones en el acceso a la información o la participación ciudadana.

Allí donde la ciudadanía es adecuadamente informada e intercambia experiencias locales, advierte los severos riesgos que enfrenta, y por ello, cuando puede participar en las decisiones, es más proclive a rechazar los extractivismos. Por ello, éstos alimentan efectos derrame que erosionan la política y la democracia. Se apunta a debilitar o anular mecanismos e institucionalidades vinculadas al acceso a la información, la participación y consulta ciudadana,

y la salvaguarda de los derechos humanos. Se argumenta, por ejemplo, que las comunidades locales no están informadas adecuadamente, no saben analizar los datos, o tienen intereses políticos ocultos. Por lo tanto, las consultas ciudadanas locales no tendrían sentido, según esa posición. Complementan esto insistiendo en que la legitimidad democrática reside en las autoridades locales o nacionales, y ellas deben decidir por sí solas si se avanza o no en los extractivismos; no habría obligaciones de consultar a la ciudadanía. Dicho de otro modo, se atacan instrumentos de democracia deliberativa y se potencian delegaciones verticales de la representación popular.

Lo mismo ocurre con la aceptación de la violencia y las violaciones de los derechos humanos alrededor de los extractivismos. Aquí se incluyen problemáticas que van desde el desplazamiento violento de comunidades al tráfico de mujeres para las redes de prostitución en campamentos mineros o petroleros, desde la judicialización de la protesta a las trabas en identificar y castigar a los que asesinan a líderes locales. Estos y otros problemas de violencia no reciben las necesarias respuestas ni siquiera desencadenan enérgicos rechazos en el resto de la ciudadanía, especialmente en las grandes ciudades. A esta aceptación resignada de la violencia contribuyen directa o indirectamente las narrativas extractivistas.

Esto es independiente de la intención de quienes esgrimen esos discursos extractivistas, ya que muchos de ellos pueden rechazar esa violencia local. Pero mi punto es que al contribuir a la narrativa del éxito extractivismo se fortalecen narrativas que son funcionales a ese tipo de derrames políticos.

6 El objeto de las narrativas

Una particularidad de las narrativas extractivistas que pasa repetidamente desapercibida es que el objeto defendido casi nunca es definido con precisión. Aquellos que apoyan la explotación petrolera o minera o los monocultivos, se refieren a los extractivismos casi siempre de forma vaga e imprecisa. Lo igualan a cualquier otro tipo de apropiación de recursos

naturales, como puede ser por ejemplo un campesino. Esta no es una cuestión menor ni un descuido, sino que aquí se sostiene que es un componente central en el armado de esas historias.

En efecto, en la medida que la definición de extractivismos sea más ambigua y difusa, eso permite superponerse y confundirse con otros muy distintos aprovechamientos del entorno en cuanto a su intensidad, los volúmenes apropiados, la inserción en el comercio o sus impactos. De esa manera es mucho más sencillo defender a los extractivismos. Por ejemplo, se retruca que la denuncia contra petroleras o mineras es como impedir el cultivo de alimentos, y que lo único que puede aceptarse es debatir sobre cómo lidiar con los impactos.

Por lo tanto, se vuelve esencial definir con la mayor precisión posible ese tipo de actividades. En la línea de reflexión y activismos en el que está inserto este análisis, se define a los extractivismos por un lado respetando algunos de los usos tradicionales del término y por el otro, se lo delimita para diferenciarlos de otros modos de apropiación de los recursos naturales (GUDYNAS, 2015a).

Siguiendo esos criterios, los extractivismos se definen como un modo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o en alta intensidad, en el cual la mitad o más son exportados como materias primas (commodities), sin procesamiento industrial o con procesamientos limitados. En esta definición las precisiones complementarias indican que se tomó como umbral que el 50% de los recursos sean procesados, y que la definición de commodity sigue a la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (a su vez basada en la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, CUCI).

Bajo esta definición los extractivismos son plurales, y además de los mineros y petroleros, existen agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros, etc. No expresan una “industria” ya que no generan productos manufacturados, están anclados localmente a los sitios donde están los yacimientos o recursos, pero se insertan globalmente. A su vez, los extractivismos producen impactos locales, tales como la deforestación o la contaminación de suelos y aguas; todos ellos ocurren en los sitios donde se realiza la extracción. Pero además, son responsables de los llamados efectos derrame, tal como se mencionó arriba.

La precisión en la definición no es un ejercicio intelectual, sino que sirve para desmontar las narrativas y es además esencial para las alternativas, ya que permite elaborar de contra-narrativas (como se aborda más abajo). En cambio, una crítica que no ofrezca una definición precisa se convierte en un ejercicio por momentos banal ya que no ataca a la narrativa extractivista.

7 Discusión: el sentido común extractivista

Las narrativas políticas que defienden los extractivismos son variadas, se organizan desde varios frentes y distintas perspectivas, y manejan un amplio conjunto de argumentos. Estas, a su vez están enmarcadas dentro de narrativas mayores con distintas posiciones económicas o políticas (FISCHER; GOTTWIES, 2013; HAJER, 1995). Entre esas grandes narrativas se incluyen por ejemplo las englobadas bajo las “locomotoras” del desarrollo del presidente J. M. Santos en Colombia (que incluía una locomotora minera), la defensa de explotar los yacimientos marinos petroleros en Brasil por el gobierno del Partido de los Trabajadores, o la imposición del fracking en la Patagonia de Argentina por la administración de M. Macri. De la misma manera, las narrativas extractivistas cobijan a su interior otras subhistorias tales como la supuesta efectividad de empresas o del control científico-técnico.

Las narraciones políticas extractivistas aprovechan unos argumentos pero a la vez excluyen otros, y se articulan selectivamente hacia arriba y abajo también aprovechando argumentos y posturas que les sean funcionales. Algunas de estas dinámicas son muy claras en la entrevista usada en este artículo ya que Baptiste escoge unos ciertos datos pero no otros, y el balance entre las presencias y las ausencias potencia su defensa de las petroleras. De ese modo se insiste en la ausencia de impactos ambientales de los extractivismos o la disponibilidad de soluciones científicas y tecnológicas, con lo que se desatienden u ocultan las evidencias de los efectos negativos. La elección de unos argumentos y la ausencia de otros se legitima con invocaciones a

la “ciencia” y el papel de los “expertos”, lo que tendrían saberes, recursos y poder para opinar sobre estos temas.

En las audiencias destinatarias de esos discursos hay agrupamientos que reproducen esa adhesión a los extractivismos. No debe interpretarse que estamos frente a la imposición del discurso de una minoría sobre las mayorías, sino ante una mutua vinculación, donde amplios sectores creen en la necesidad de explotar hasta el último gramo de minerales o la última gota de hidrocarburos, y todos ellos contribuyen a reproducir esas ideas. Tampoco estamos ante una creación reciente sino que resulta de una larga historia que se rastrea a tiempos de la colonia (MACHADO ARÁOZ, 2014).

Esa dinámica es uno de los principales factores en generar el sentido común que una nación debe ser extractivista para progresar. Su prevalencia es generalizada y por ello ha sido identificado como cultura, ideología, hegemonía, religión, etc., por muy distintos autores. Las narrativas políticas extractivistas se blindan como un sentido común, dado por válido, que se legitima a sí mismo y a la vez excluye constantemente a los reclamos por alternativas, e incluso para algunos se vuelven impensables otras opciones. Eso explica que, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, repetidamente calificara como “locos”, e incluso que se debía hospitalizar, a los que se oponían a los extractivismos y reclamaban alternativas.

La repetida apelación a “científicos” y “expertos” no es menor ya que marginaliza otras visiones ciudadanas, calificándolas como ignorancia o serviles a intereses políticos ocultos. Se concluye, por ejemplo, que las comunidades no pueden votar responsablemente en una consulta local sobre un proyecto extractivo ya que carecerían de la información adecuada y se dejarían llevar apenas por emociones, mitos o fantasías.

De esta manera se conforman narrativas donde se mezclan aseveraciones fácticas con premisas morales, interpretaciones con opiniones, operando como medios para persuadir y justificar, y también para imponer, unas ciertas ideas. Estas narrativas son representaciones esquemáticas, muchas veces poco rigurosas, y aunque sería apropiado no esperar mucho más de ellas, como advierte Roe (1991), el problema es que algunas son presentadas como

explicaciones afirmativas y suficientes. Lo que eran generalizaciones pasan a ser exhibidas como verdades objetivas. Allí se generan legitimaciones políticas sobre conceptos claves, tales como “recurso natural” o “desarrollo” entre otros. Se apuntalan unos sistemas de creencias políticas, entendidos como conglomerados de suposiciones normativas y causales. Generan y sostienen instituciones (como ministerios en minería y petróleo), y recursos de poder, que operan para aceptarlos, sustentarlos y legitimarlos. Se organizan relatos que usan evidencias fácticas pero también incorporan representaciones simbólicas con contenidos emocionales, controlando las imágenes y las interpretaciones de los problemas (STONE, 2012). De esta manera, como en otras narraciones, los extractivismos están repletos de “historias de inocencias y culpabilidad, víctimas y opresores, sufrimiento y maldad” (STONE, 2012, p. 228).

Esto lleva a analizar la conformación de un “sentido común” extractivista, y en ello es provechoso recordar los aportes de Stuart Hall en un recorrido que se nutre de Antonio Gramsci. El sentido común está referido a formas de pensar cotidianas, simples, vernaculares, en buena medida intuitivas, y que están ampliamente compartidas en la sociedad (HALL; O’SHEA, 2015). Tiene sus lógicas y contenidos, y por ello se lo asume como coherente aunque no necesariamente lo sea. El abordaje de Hall y O’Shea (2015) para el Reino Unido ofrece algunas pistas a la actual situación latinoamericana, al analizar la lenta penetración del neoliberalismo hasta transformar los sentidos comunes de la sociedad británica. Se modificaron aspectos estructurales, tales como naturalizar la idea de una sociedad que es un agregado de consumidores competitivos.

Un proceso de este tipo ocurre en América Latina con los extractivismos. Se difunden poco a poco, saberes y sensibilidades que refuerzan las viejas ideas de una muy rica naturaleza que debe ser explotada, actualizada con un apego al desarrollismo economicista, la minimización de los impactos locales y la naturalización de los efectos derrame que transforman las políticas públicas, llegando al extremo de naturalizar la violencia.

Eso explica un sentido común extractivista que es compartido por ideologías y prácticas políticas conservadoras y progresistas, y puede haber continuidad entre ellos. Un ejemplo impactante es la promoción del fracking en

la Patagonia, iniciada por la administración de C. F. de Kirchner y proseguida, todavía con más intensidad, por el gobierno de M. Macri, con apoyo de varios sectores, incluyendo sindicatos.

Es por ese tipo de razones que es oportuno regresar a Hall, cuando advierte que ante la crisis de su tiempo, la izquierda ofrecía lecturas desde posiciones bien atrincheradas y tradicionalistas, pero que en muchos casos no era capaz de brindar un marco analítico o teórico adecuado a su contexto y tiempo. Por ello sus propuestas políticas resultaban incompletas (HALL, 1979, p. 14).

Se podría replicar que esa sentencia era apropiada para los avances de la “nueva derecha” thatcherista en la Inglaterra de fines de la década de 1970, pero no tiene relevancia para varios casos latinoamericanos recientes. Pero en realidad, esa problemática se repite en la actualidad, ya que la esperanza de una mirada crítica radical se encogió a medida que muchos intelectuales de izquierda se volvieron progresistas, y terminaron en el sentido común extractivista. Muchos de esos espacios de volvieron usinas que nutrían las narrativas de apoyo al extractivismo, evitando definirlos con precisión, minimizando los impactos locales e ignorando los efectos derrame⁸. Proliferaron debates sobre el papel de las empresas estatales y los marcos de tributación, lo que sin duda es importante, pero no sobre la viabilidad y las consecuencias de los extractivismos, especialmente sobre pueblos indígenas. En algunos países, como Ecuador y Bolivia, los gobernantes citaban a Marx o Lenin, pero repetían una inserción comercial subordinada a la globalización.

Sea desde una postura o la otra, los efectos derrame avanzaron, y en especial la violencia, debilitamiento de la salvaguarda de derechos y recortes democráticos. Esto a su vez alimentó a sectores políticos de la extrema derecha, con el caso extremo de Jair Bolsonaro en Brasil, bajo cuya administración se anuncia una exacerbación de los extractivismos.

⁸ Un buen ejemplo de la defensa de extractivismos progresistas de base estatal y que a la vez desestima las alertas y críticas es Borón (2012). El autor entiende que no hay alternativas a los extractivismos ni al desarrollo (su posición sería un rechazo a un desarrollo que es capitalista, pero no a la idea de desarrollo en sí misma, y entonces hay que buscar uno de otro tipo). Tampoco pasan desapercibidas varias ausencias en sus análisis, notablemente la de los pueblos indígenas.

Varios sectores de la intelectualidad progresista suspendieron sus abordajes críticos sobre ese sentido común, y en cambio debatían sobre los epifenómenos de los extractivismos. Las razones son variadas: sea por obediencia partidaria, por quedar atrapados dentro de la maquinaria del Estado, o porque sinceramente creían en todo ello. Ese análisis escapa a este artículo, pero ellos fueron exitosos en influenciar a los gobiernos y en brindarles argumentos a las narraciones extractivistas.

Aunque existían múltiples voces latinoamericanas que exploran salidas a esa dependencia extractivista, tanto dentro de la sociedad civil como en la academia, estaban marginalizadas. La diseminación de las narrativas extractivistas fue a costa de no entender ni incorporar esas alertas ciudadanas, no incorporar la evidencia científica más reciente de los impactos en juego, y hasta olvidar los mandatos propios de la izquierda latinoamericana por ofrecer críticas radicales. Dicho de otro modo, y otra vez recordando a Hall (1979), hubieron muchos académicos atrapados en las narrativas desarrollistas, que no supieron abordar los aspectos particulares y específicos de la coyuntura histórica que se vivía en América Latina. Por ello, los que seguían empantanados en los sentidos comunes desarrollistas erosionaron las propias capacidades de criticidad. Pero esa criticidad es esencial para explorar caminos de salidas a los extractivismos.

8 Narrativas, contra-narrativas y alternativas

El análisis de las narrativas políticas es una perspectiva sobre procesos que son propios a la vida política y los debates públicos. Por lo tanto, una alternativa a los extractivismos no pasa por anular esos debates o imponer otra narrativa por la fuerza. Eso sería como maniatar a la propia política. En cambio, es necesario entender las narraciones que apoyan los extractivismos y poder deconstruirlas. Simultáneamente se deben erigir contra-narrativas en varios frentes para dejar en claro los impactos de los extractivismos y sus íntimas vinculaciones con unos ciertos tipos de desarrollo.

Los principales atributos señalados arriba permiten identificar cuestiones a rebatir, argumentos a refutar, y encadenamientos a revisar. Por ejemplo, no es aceptable disfrazar una narrativa específica como una expresión de la “ciencia”, y en cambio se deben defender otras argumentaciones que admitan la incerteza, expresen riesgos, y sean participativas. También es necesario mostrar los efectos derrames de los extractivismos, como pueden ser las condicionalidades económicas o el debilitamiento de la democracia.

Existen muchos esfuerzos ciudadanos en este sentido, y están en marcha coordinaciones y complementaciones en varios países que ilustran la potencialidad del trabajo en red. La presencia de esos aportes es notable dado que enfrentan a grupos con gran poder económico y político que organizan el sentido común extractivista.

Incluso puede argumentarse que sean necesarias “narrativas insurgentes”. Su propósito sería explorar alternativas que el sentido común extractivista, y con ello el desarrollo, consideran imposibles e incluso impensables. Allí radica una de las mayores potencialidades de las contranarrativas. Tampoco puede olvidarse el sentido de urgencia, ya que muchos impactos son intolerables y requieren respuestas inmediatas, que no pueden esperar. Esta reacción debe alcanzar las raíces más profundas de las culturas contemporáneas latinoamericanas. Esas raíces sostienen un sentido común que permite el slogan de explotar el petróleo “hasta la última gota”, mientras que las alternativas deben presentar su idea de dejar el crudo bajo tierra, o sea, ni siquiera sacar una gota. Son posiciones insurgentes ya que implican subversiones a esos sentidos comunes. Esto requiere, por supuesto, recuperar el sentido de criticidad e independencia en académicos y militantes, tal como se reclamaba en la sección anterior. También necesita entender y acompañar las resistencias ciudadanas que proliferan en todo el continente.

Existen varios ensayos en ese sentido, especialmente en Perú y Bolivia, bajo el concepto de transiciones al post-extractivismo (GUDYNAS, 2015b). Los contenidos de esas propuestas escapan al objetivo del presente artículo, pero debe apuntarse que su enorme potencial radica en que se están ofreciendo narraciones políticas cada vez más organizadas y articuladas de

una vida, de estados y de regiones que no dependen de los extractivismos. Eso explica que desde el empresariado se considere a esas propuestas como una de sus principales amenazas a enfrentar, como ocurre en Colombia (PONCE MURIEL, 2014)⁹. Estas experiencias muestran que los argumentos son muy importantes pero también lo es la capacidad en encadenarlos y complementarlos en el marco de contra-narraciones que no sólo denuncien los impactos sino que muestren opciones alternativas al desarrollo, y que sean entendidas y sentidas como posibles, e incluso deseables.

Referencias

- ANTONELLI, M. A. Megaminería transnacional e invención del mundo cantera. *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, n. 252, p. 72-86, jul./ago. 2014.
- BORÓN, A. *América Latina en la geopolítica del imperialismo*. Buenos Aires: Luxemburg, 2012.
- CAMPANINI, J. C.; VILLEGAS, P.; JIMÉNEZ, G.; GANDARILLAS, M.; PÉREZ, S. *Los límites de las fronteras extractivas en Bolivia*. El caso de la biodiversidad en el Aguaragüe. Cochabamba: Informe OMAL No 12, 2014.
- CISNEROS, P.; CHRISTEL, L. The democracy deficit of corporate social responsibility in post-neoliberal times: an analysis of the Argentinian and Ecuadorian experiences. *Journal Cleaner Production*, v. 84, p. 174-182, dez. 2014.
- FISCHER, F. *Reframing public policy*. Discursive politics and deliberative practices. New York: Oxford University Press, 2003.
- FISCHER, F.; GOTTWEIS, H. The argumentative turn in public policy revisited: twenty years later. *Critical Political Studies*, v. 7, n. 4, p. 425-433, dez. 2013.
- FRYNAS, J. G. The false developmental promise of Corporate Social Responsibility: evidence from multinational oil companies. *International Affairs*, v. 81, n. 3, p. 581-598, maio, 2005.
- FUNTOWICZ, S. O.; RAVETZ, J. *La ciencia posnormal*. Barcelona: Icaria, 2000.

⁹ El post-extractivismos recibe amplia consideración y es severamente cuestionadas en el reciente “libro blanco” de la “minería moderna para el progreso” editado por las cámaras empresariales de la minería de Colombia.

GSOTTBAUER, E.; VAN DEN BERG, J. Environmental policy theory given bounded rationality and other-regarding preferences. *Environmental Resource Economics*, v. 49, n. 2, p. 263-304, jun. 2011.

GUDYNAS, E. *Extractivismos, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza*. Cochabamba: CEDIB y CLAES, 2015a.

GUDYNAS, E. Extractivismos en América del Sur y sus efectos derrame. *La Revista, boletín Sociedad Suiza Americanistas*, n. 76, p. 13-23, 2015b.

GUDYNAS, E. Hasta la última gota. Las narrativas que sostienen a los extractivismos. *RevIISE*, Universidad de San Juan, Argentina, v. 13, p. 15-31, 2019.

GUDYNAS, E. Múltiples paradojas: ciencia, incertidumbre y riesgo en las políticas y gestión ambiental de los extractivismos. *Polisemia*, Bogotá, v. 14, n. 25, p. 5-37, 2018.

GUDYNAS, E.; GUEVARA, R.; ROQUE, F. *Hetrodoxos: tensiones y posibilidades de las políticas sociales en los gobiernos progresistas de América del Sur*. Montevideo: CLAES y OXFAM, 2008.

HAJER, M. *The politics of environmental discourse*. Ecological modernization and the policy process. Oxford: Oxford University Press, 1995.

HALL, S. The great moving right show. *Marxism Today*, p. 14-20, jan. 1979.

HALL, S.; O'SHEA, A. Common-sense neoliberalism. In: HALL, S.; MASSEY, D.; RUSTIN, M. (ed.). *After neoliberalism?* The Kilburn manifesto. Londres: Lawrence & Wishart, 2015. p. 52-68.

HONTY, G. Peru: 60 derrames en 15 años. *ALAI* (Agencia Latino Americana de Informaciones), Quito, 10 mar. 2016. Disponible em: <https://www.alainet.org/es/articulo/175970>. Acceso em: 01 maio 2016.

JONES, M. D.; MCBETH, M. K. A narrative policy framework: clear enough to be wrong. *Policy Studies Journal*, Malden, v. 38, n. 2, p. 329-353, 2010.

KIMERLING, J. International standards in Ecuador's Amazon oil fields: the privatization of environmental law. *Columbia Journal Environmental Law*, v. 26, n. 2, p. 289-397, 2001.

LESSMANN, J.; FAJARDO, J.; MÚÑOZ, J.; BONACCORSO, E. Large expansion of oil industry in the Ecuadorian Amazon: biodiversity vulnerability and conservation alternatives. *Ecology and Evolution*, v. 6, n. 14, p. 4997-5012, 2016.

MACHADO ARÁOZ, H. *Potosí, el origen*. Genealogía de la minería contemporánea. Buenos Aires: Mardulce, 2014.

O'ROURKE, D.; CONNOLLY, S. Just oil? The distribution of environmental and social impacts of oil production and consumption. *Annual Review Environmental Resources*, v. 28, p. 587-617, 2003.

PONCE MURIEL, A. *Minería moderna para el progreso de Colombia*. Bogotá: ANDI – Cámara Asomíneros, Cámara Colombiana de Minería y Federación Nacional de Productores de Carbón, 2014.

ROE, E. Development narratives, or making the best of blueprint development. *World Development*, v. 19, n. 4, p. 287-300, 1991.

ROE, E. *Narrative policy analysis*. Theory and practice. Durham: Duke University Press, 1994.

RUIZ MOLLEDA, J. C.; VPASQUEZ, G.; TRUJILLO, W. Mitos y verdades sobre los derrames de petróleo en el Perú. *IDL, Justicia Viva*, 27 out. 2017. Disponível em: <http://www.justiciaviva.org.pe/new/mitos-y-verdades-sobre-los-derrames-de-petroleo-en-el-peru/>. Acesso em: 01 nov. 2017.

STONE, D. A. *Policy paradox: the art of political decision making*. 3 ed. New York: Norton, 2012.

VALLEJO, M. C.; LARREA, C.; BURBANO, R.; FALCONÍ, F. *La iniciativa Yasuni-ITT desde una perspectiva multicriterial*. Quito: PNUD y FAO, 2011.

WCS. Efectos de las carreteras sobre la fauna silvestre en el Parque Nacional Yasuní. *Wildlife Conservation Society, Boletín*, Quito, v. 1, p. 1-7, 2006.

WODAK, R. Argumentation, political. In: MAZZOLENI, G.; BARNHURST, K.; IKEDA, K.; MAIA, R.; WESSLER, H. (ed.). *The international encyclopedia of political communication*. West Sussex: Wiley Blackwell, 2016. p. 43-52.

WOJTANOWICZ, A. K. Environmental control technology for oilfield processes. In: ORSZULIK, S. (ed). *Environmental technology in the oil industry*. Heidelberg: Springer, 2016. p. 25-59.